**MODIFICACION JUDICIAL DE LA PENA
CONVENCIONAL.
ARTICULO 1154 C.C.**

Juan Antonio MORENO MARTINEZ
Profesor de Derecho Civil

El único precepto que sobre moderación de la pena viene a establecer nuestro Código Civil, es el art. 1154, disponiendo que «el Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor».

El estudio de la operatividad del artículo 1154 se realizará en el supuesto de incumplimiento total y de incumplimiento parcial o irregular.

1. INCUMPLIMIENTO TOTAL

La interrogante que se viene planteando en la doctrina es si tal precepto dictado para el cumplimiento parcial, a través de una aplicación analógica, podría utilizarse para el incumplimiento total, por estimarse excesiva la pena.

Nuestra solución ha de ser negativa. A este respecto hay que volver a resaltar la importancia de la autonomía de la voluntad que el art. 1255 viene a proclamar, y en este sentido estimar que las partes, haciendo uso de tal facultad, establecieron una pena para el caso previsto por ellas (que se produzca el incumplimiento total), independiente de si realmente se han producido daños o no; ello se agrava aún más, si se tiene en cuenta que el Código permite la pena cumulativa.

Podría argumentarse, en orden a la no aplicación del art. 1154 al supuesto de incumplimiento total, el razonamiento de que, si tal artículo establece expresamente las palabras «en parte o irregularmente cumplida», es que está excluyendo implícitamente el incumplimiento total, bien por estimar, como nos dice Albaladejo, que tal artículo no ha pretendido como fin el reducir la pena a la cuantía de los daños efectivamente producidos, bien por imponer una pena parcial que guarde con el cumplimiento parcial lo mismo que la pena total con el incumplimiento total¹.

De lo dicho con anterioridad resulta claro que, si la pena fue establecida para el supuesto de cierto tipo de incumplimiento parcial o irregular, es claro que cuando la obligación se cumpla parcial o irregularmente en la proporción para la que se estableció, la pena no es moderable. En definitiva la moderación de la pena procede, no por el hecho de haber cumplido en parte sus obligaciones el deudor, sino por haber cumplido en parte la obligación para la que se pensó la pena.

Hay que dejar bien claro, que en el caso de establecerse una pena desproporcionadamente alta (que es perfectamente permisible por nuestro

Código Civil), habría que estudiar, en función de las circunstancias que concurren en el caso, si bajo la forma de cláusula penal se encubre un pacto usurario, que ya en el Derecho Romano se sancionaba con su nulidad.

Pero el problema, como nos dice Espín, sería distinto al que examinamos, pues no se trataría de una cláusula penal válidamente estipulada². La ley de Represión de la Usura de 23-7-1908 intentó poner remedio a través de su art. 9 señalando que «lo dispuesto en esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

Nuestro Tribunal Supremo, interpretando perfectamente este artículo, solucionó el problema en la Sentencia de 5-11 de 1955: «La cláusula penal puede ser una operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero que entre dentro del ámbito de la ley de 1908. En tal supuesto la aplicación de la ley de Azcárate no se hará, en sentido técnico, a una cláusula penal, sino a un préstamo encubierto o simulado bajo la apariencia jurídica de una pena convencional».

Nuestra Jurisprudencia, en numerosas sentencias, bien implícitamente, bien de forma expresa, se ha inclinado por la no moderación en caso de incumplimiento total.

En este sentido la Sentencia de 16-1 de 1910 señala que «cuando el incumplimiento de la obligación no ha sido total, ni ha sido debido sólo a la culpa del que ha incurrido en él, hay que proceder a la moderación de la pena...»; Sentencia de 8-julio de 1911 «El Tribunal no tiene el poderío que le concede el artículo 1154, sino únicamente en la hipótesis de cumplimiento irregular, no en la de incumplimiento absoluto»; Sentencia de 19-12-1930, «procede la moderación de la pena al no tratarse de un incumplimiento total por la sola culpa del que incurrió en ella»; Sentencia de 21-6-1950 «se rechaza la aplicación del artículo 1154 cuando no se demuestre que la obligación se ha cumplido parcial o irregularmente»; Sentencia de 27-5 de 1959, «No procede la reducción de cuantía al carecer de toda justificación la persistente negativa a abonar el débito ni cuando se le facilitó moneda-dólar para su pago por los órganos competentes ni tampoco cuando se le facultó para saldarle en moneda extranjera»; y la Sentencia de 1-12-1973 señala que «es imperativa y no facultativa para los Tribunales la modificación equitativa de la pena cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor, pero, sin embargo, no da lugar tal modificación en los supuestos no de cumplimiento irregular, sino de cumplimiento total».

2. CUMPLIMIENTO PARCIAL O IRREGULAR

2.1. *Idea general. Antecedentes*

Resulta de gran interés el determinar, ante un incumplimiento, si éste es total, o si tan sólo parcial o irregular, pues ello incidirá respectivamente en su no moderación, o moderación de la pena convencional. Si de lo acordado por las partes o de la naturaleza de la obligación no se establece con claridad la distinción, ello deberá deducirse del contenido de la promesa y conjunto de circunstancias.

Ya se ha visto en el epígrafe anterior que la pena se aplica en toda su integridad, en el supuesto de incumplimiento total.

Supuesto distinto es cuando este incumplimiento no ha sido completo (cumplimiento parcial) o no exacto en cuanto al modo, a la forma o al lugar (cumplimiento irregular), en cuyo caso parece justo y equitativo el moderar la pena, pues de lo contrario podría conseguir el acreedor un excesivo enriquecimiento. Pero ello, siempre sin perjuicio de que otra cosa hubieran establecido las partes, pues, como se sabe, la ley fundamental en materia de cláusula penal es la voluntad concordada.

El Código Civil en su art. 1154, nos aporta sus bases al decir que «el juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor».

El fundamento de este precepto se halla en el hecho de que las partes no han podido prever la cuantía de los daños posibles cuando el deudor cumpla sólo en parte o cumpla irregularmente, imposibilitando el que se dicten normas de carácter general que puedan resolver estas situaciones. Ante este supuesto se delega al juzgador la misión de resolver el caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias que vienen a darse en él, basándose, como se infiere del art. 1154, en criterios equitativos.

No obstante, esta facultad viene a representar una excepción, pues como establece el art. 1091, «Las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes» y los jueces no pueden alterar esta ley privada, que los propios contratantes dictaron ³.

Antecedentes. Ya en el Derecho Romano, según los distintos autores que han estudiado el tema, el cumplimiento de parte de la obligación impedía el exigir al acreedor la pena íntegra.

Se citaban como fundamentos dos textos. En uno de ellos se examina el caso de que haya sido prometido bajo pena la comparecencia de varios esclavos en juicio, estimándose que si uno de estos falta, «poenan inte-

gram committi», pero se añade la posibilidad de oponerse por parte del deudor la «exceptio doli», en el sentido que al acreedor ofreciera una parte proporcional en función de los esclavos que había entregado. El otro texto se refería a un caso particular, ya que se trataba de que se pactase su íntegra prestación, y ante este supuesto el jurisconsulto Paulo decide que si la cosa fue entregada en parte, la pena se debería por entero ⁴.

Pese a que se citan estos textos como fundamento de la moderación en caso de cumplimiento parcial, parece que no es posible sentar principios generales.

2.2. *Proceder jurisprudencial*

Nuestro Tribunal Supremo, en base a los presupuestos del art. 1154, ha venido marcando las pautas de la moderación a través de las numerosas sentencias en que se ha pronunciado.

Podemos esquematizarla en numerosos apartados:

2.2.1. Presupuestos en orden a su aplicación

Resulta necesario el que se haya producido un incumplimiento parcial o no exacto en cuanto a la calidad, modo y forma, siendo indiferente el que haya habido buena o mala fe en el deudor para que se proceda a la moderación.

En numerosas sentencias se ha corroborado esta afirmación. En este sentido la Sentencia de 15-6 de 1914 establece «que el precepto del art. 1154 del Código Civil, subordina su aplicación al hecho de que la obligación principal haya sido en parte o irregularmente cumplida...»; Sentencia de 31-10 de 1922 «Tratándose de obligación irregularmente cumplida respecto al plazo y no en su totalidad, debe aplicarse el art. 1154»; Sentencia de 21-5 de 1948 «El juez moderará la pena equitativamente cuando la obligación principal haya sido en parte o irregularmente cumplida»; Sentencia de 28-1 de 1958 «El cumplimiento irregular del contrato da lugar, con arreglo al art. 1154, a la moderación de la pena pecuniaria»; Sentencia de 25-11 de 1960 «La facultad moderadora de la pena presupone su irregular realización»; Sentencia de 3-1 de 1964 «La apreciación de si la obligación principal ha sido en parte o irregularmente cumplida es facultad exclusiva del Tribunal de instancia...»; Sentencia de 20-11-1970 «La potestad que concede el art. 1154 no lo es de manera absoluta, sino que está condicionada a la circunstancia de que la obligación hubiera sido en parte o irregularmente cumplida»; Sentencia de 20-11 de 1972 «El artículo 1154

autoriza al juez a moderar la pena pactada cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor, como ha sucedido en el presente caso, en que la construcción principal se ha realizado, si bien en la forma no totalmente conforme con lo pactado, lo que hace prudente reducir 500.000 pts. la penalidad prevista para el caso de incumplimiento total; y Sentencia de 4-7-1981 «La facultad de modificar equitativamente la pena cuando hubiera sido irregularmente cumplida por el deudor...».

El artículo 1154 no tiene en cuenta, a efectos de moderación, el de si hubiera mediado buena o mala fe por parte del deudor. Esto se puede comprobar a través de dos sentencias muy significativas dictadas por nuestro Tribunal Supremo. La primera es de 21-5 de 1948, estableciendo que «el art. 1154 del Código Civil no exige como requisito para su aplicación una buena fe manifiesta, pues únicamente subordina la procedencia de la moderación de la pena a la condición de que la obligación principal haya sido en parte o irregularmente cumplida. La segunda es de 8-3 de 1951 que en el mismo sentido que la anterior, excluye toda consideración de la buena o mala fe del que incumple.

2.2.2. ¿Facultad o deber? Naturaleza del artículo 1154 del Código Civil

De la lectura del artículo 1154 del Código Civil, se desprende claramente que el juez tiene el deber, y no sólo la facultad, de moderar la pena. Es imperativa en cuanto que el juez debe hacer uso de ella, es facultativa en cuanto a la intensidad de la reducción.

Cuando no sea pedido por las partes, debe instarse de oficio. En este sentido las sentencias de 3-7 de 1915, 15-6 de 1941 y de 3-1 de 1964.

No obstante existe una Sentencia de 20-11-1970 que viene a sostener lo contrario. «No puede desvirtuarse por otra parte con los argumentos utilizados por el recurrente en su escrito de formalización en el sentido de cuando el legislador dice que «el juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor», no está estableciendo una facultad, sino imponiendo un deber que habría de ser imperativamente observado con independencia de las alegaciones de los litigantes: lo cual corresponde con la realidad, puesto que afirmar que la modificación se hará de manera equitativa, implica algo consustancial con la valoración y apreciación discrecionales que es ajeno a la idea de un mandato imperativo e implica la necesidad de que sea solicitado por aquél quien interese».

Pese a la sentencia, la Jurisprudencia es uniforme en considerar que, a falta de petición de parte, se decreta «ex officio».

Resulta interesante analizar el proceder jurisprudencial acerca del carácter de imperativa exigencia judicial. En este sentido, la Sentencia de 16-1 de 1910, «Cumplida parcialmente una obligación, debe moderarse equitativamente la pena, a tenor del artículo 1154 que por contener un precepto imperativo, es de obligada observancia»; Sentencia de 16-3 de 1910 «debió la Sala, por estar comprendido lo menos en lo más, moderar equitativamente la pena reclamada en la demanda, a tenor de lo dispuesto en el art. 1154, que, por contener un precepto imperativo, es de obligada observancia y que por cuya inaplicación al caso actual procede la casación de la sentencia»; Sentencia de 13-2 de 1911 «Es de ineludible aplicación la pena estipulada, considerando a la misma como una consecuencia necesaria del incumplimiento irregular»; Sentencia de 30-10 de 1922 «La modificación del juzgador no integra una facultad del mismo, sino una obligación ineludible, por imperativo del art. 1154»; Sentencia de 30-1 de 1932 «Cumplida parcialmente la obligación, debe moderarse equitativamente la pena por ser imperativo del artículo 1154 del Código Civil»; Sentencia de 16-6 de 1941 «desde que se acreditó el cumplimiento parcial, surge el deber de aquéllos de moderar la pena convencional»; Sentencia de 21-5 de 1948 «El art. 1154 establece de modo imperativo y no meramente facultativo que el Juez moderara equitativamente la pena cuando la obligación principal haya sido en parte o irregularmente cumplida, y en este caso es de estimar la existencia de cumplimiento parcial, siendo conforme a equidad...»; Sentencia de 21-6 de 1950 «El precepto contenido en el art. 1154 del Código Civil, entraña para los tribunales una norma de derecho imperativo»; Sentencia de 27-septiembre de 1955 «Aunque la expresión formal del art. 1154 del Código Civil alude literalmente al Juez como encargado de moderar la pena, si el incumplimiento de la obligación principal ha sido en parte o irregularmente cumplido, no debe ofrecer duda que el deber y no mera facultad de moderación...»; Sentencia de 1-12 de 1965, «la modificación de la pena por el Juez se impone imperativamente, no como una facultad, sino como un deber».

2.2.3. Criterios de aplicación. Equidad

En principio, habrá que examinar si las partes, en el momento de celebración, fijaron los criterios a través de los cuales se aplicaría la moderación, y todo ello en orden a respetar la autonomía de la voluntad, consagrada en el art. 1255 del Código Civil.

En su defecto, el legislador, ante la imposibilidad de dictar normas generales que puedan resolver el conflicto de intereses, delega a través del art. 1154 la misión de ajustar la ley del contrato a las circunstancias concurrentes, por razón de equidad.

Es decir la reducción tendrá que basarse en un juicio de equidad sobre el presupuesto de un incumplimiento parcial o irregular de la prestación (aceptado por el acreedor), nunca de un incumplimiento total. Esta idea de equidad que actúa como límite en el juzgador debe entenderse de acuerdo con los criterios de justicia vigentes dentro de la comunidad y con las convicciones y creencias imperantes en la misma ⁵.

La equidad se halla enmarcada dentro de los principios generales del Derecho. Así por la afirmación de la Sentencia de 29-11 de 1899 se señala que «encierra la equidad los principios generales del Derecho, a que deben atenerse los Tribunales cuando no tienen disposición precisa ni costumbre obligatoria que aplicar, y sirve del mismo modo para interpretar los contratos, pero sin que pueda prevalecer contra las leyes ni contra las convenciones».

En la misma línea de lo expresado, Puig Peña opina que la modificación debe ser equitativa, teniendo en cuenta los intereses de las partes como el provecho que del cumplimiento parcial haya obtenido el acreedor. Y por ello:

- Si el acreedor no ha obtenido provecho alguno no procederá la moderación judicial, al entenderse aquí que procede el resarcimiento íntegro, que viene representado por la pena.
- En supuestos de intereses usuarios, deberá entregar el deudor lo indebidamente recibido.
- Si el provecho fue justo, habiendo percibido los intereses legalmente correctos, no es dable obligarle a devolver los citados intereses recibidos como cláusula penal porque, si bien dados los términos absolutos que informan este artículo y el principio de Derecho aplicable a toda clase de pena, en cuanto a sus efectos retroactivos, procede la aplicación de aquél en lo favorable para la liquidación de lo pagado, tal efecto retroactivo no puede llevarse al extremo de imponer al acreedor la obligación de devolver las cantidades legítimamente cobradas al deudor ⁶.

La práctica jurisdiccional ha reflejado en todo momento que el criterio de moderación se hace en virtud de un arbitrio de equidad.

En este sentido la Sentencia de 22-12 de 1908 establece que «las reglas de equidad en que se basa esencialmente el art. 1154 del Código Civil y el principio de Derecho que exige la restricción en todo lo que

pueda resultar perjuicio no permiten que se separen los términos de un contrato para el objeto de agravar una condena; y sentado esto, no puede por menos de estimarse que el referido artículo no ha sido infringido por la sentencia recurrida, ya que la misma aprecia acertadamente que los demandados, al aceptar los lotes formados por los contadores, cumplieron en parte la obligación establecida del contrato que con anterioridad tenían celebrado»; Sentencia de 16-1 de 1910 «la Sala debió moderar equitativamente la pena conforme al art. 1154 del Código Civil»; Sentencia de 3-7 de 1915 «que no existe incongruencia, ni infracción cuando el Tribunal «a quo», en uso de la potestad establecida en el art. 1154 del Código Civil modifica equitativamente la pena...»; Sentencia de 14-3 de 1922 «Que al reducir el importe de las multas pactadas por el retraso de la construcción de un edificio, el Tribunal hace uso de la facultad moderadora, y por tanto, discrecional y equitativa que otorga el art. 1154; Sentencia de 8-1 de 1945 «En la cuantía en que debe ser reducida, rigen los principios de equidad que son de libre y soberana aplicación por los Tribunales de instancia con arreglo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto; Sentencia de 4-7 de 1981 «Dados los términos literales del art. 1154 del Código Civil, cuya violación denuncia el recurso, la facultad de modificar equitativamente...» y Sentencia de 20-4 de 1983 «Por lo que en uso del artículo 1154 del Código Civil, se moderó a su amparo equitativamente».

El criterio, en orden a la reducción de la pena, está en proporción con lo que se cumplió. Si bien este principio ha sido mantenido fiel por nuestra Jurisprudencia, a través de numerosas sentencias en donde siempre los ha tomado en consideración, en algunas ocasiones ha venido a quebrantarse en parte. Este dilema se puso en tela de juicio en las cosas compradas a plazos.

Como nos dice Albaladejo, resulta frecuente en la práctica que, pagando a plazos una cosa comprada, se establezca que cuando se deje de abonar alguno, se disuelva el contrato, pactando la cláusula de que el comprador en tal caso pierde los plazos que pagó. Frente a esa práctica, el Tribunal Supremo ha moderado esa pena al estimar que en tal supuesto, no perdiese sino parte de los plazos que pagó ⁷.

Este es el criterio de la Sentencia de 8-1 de 1915.

Resulta interesante señalar que en algunas sentencias, al pronunciarse por la concesión de un nuevo plazo para cumplir, no puede calificarse de moderación, sino de facilitación en el cumplimiento y así evitar la imposición de la pena. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5-2 de 1914 «Pactada como pena la pérdida de los terrenos, construcciones y

mejoras en cierto contrato de venta a plazos que quedó incumplido por el comprador, es forma de moderación de aquélla la concesión, por el Tribunal de instancia, de un plazo al comprador para ponerse al corriente de sus obligaciones, transcurrido el cual se aplicaría la cláusula penal con arreglo a lo convenido».

2.2.4. Órgano competente. Irrevisibilidad en casación

Aunque la expresión literal del artículo 1154 del Código Civil alude únicamente al Juez como encargado de moderar la pena si el incumplimiento de la obligación principal ha sido en parte o irregularmente cumplida, no debe ofrecer duda que el deber y no mera facultad de moderación o degradación, corresponde también al Tribunal de segunda instancia, ya que por virtud de la apelación en ambos efectos, y sin limitación de temas en litigio, asume jurisdicción plena para conocer del pleito, como el Juez en toda su integridad.

Debemos hacer constar que el sistema de recursos es el general de nuestro Derecho, salvo el de casación, aunque necesitando de las siguientes precisiones:

- El supuesto de apreciación de si la obligación ha sido en parte o irregularmente cumplida es recurrible en casación por el motivo 7 de art. 1692 de la L.E.C. Es decir, de si fue o no total el incumplimiento o la cuestión de si realmente lo hubo o no.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 21-5 de 1948 establece que «sí es recurrible la apreciación del Tribunal en orden a la naturaleza e intensidad del incumplimiento».

- Sin embargo, en el supuesto de que se produzca el cumplimiento parcial, el juicio de equidad a través del cual se realiza la moderación es irrevisable en casación. En este sentido se ha pronunciado en la Jurisprudencia. Así la Sentencia de 30-1 de 1931 «Habiendo apreciado el Tribunal «a quo» la naturaleza de la cláusula penal que ostenta la estipulación del contrato, así como también el hecho de haberse cumplido el contrato en su mayor y principal parte, siempre resultará irrevisable en casación el juicio de equidad que el Tribunal de instancia hubo de llevar a cabo, para concluir moderando la pena estipulada, en cumplimiento de lo imperativamente dispuesto por el art. 1154 del Código Civil»; Sentencia de 11-3 de 1971 «Las razones motivadoras del ejercicio de su ilimitada facultad moderadora no están sujetas a casación»; Sentencia de 4-7 de 1981 «...en los casos en que, como en el presente, la obligación de pagar el precio ha sido

parcialmente cumplido, en la que va implícito un juicio de equidad irrevocable en casación» y Sentencia de 20-4 de 1983 «...en el ejercicio por lo demás, por los Tribunales de un cometido discrecional no revisable en casación».

1 Cf. M. ALBALADEJO, *Derecho Civil II*, Vol. I, Barcelona, 1977, p. 267.

Frente al criterio de inmutabilidad del C.C. español en este tipo de incumplimiento, en las Codificaciones modernas prevalece el criterio de moderación.

Así, la Legislación francesa, a partir de la reforma de 1975, viene a reconocer en su art. 1152, la facultad al juez de moderar o aumentar la pena en el supuesto de que ésta sea excesiva o irrisoria. La doctrina insiste en la excepcionalidad de la intervención del juez. En este sentido A-Weill-Terré, *Droit. Les obligations*, Paris, 1980, p. 535; J. CARBONNIER, *Droit Civil. Les obligations*, Paris, 1982, p. 308; S. SANZ: «La consécration du pouvoir judiciaire par la loi du 9 juillet 1975 et ses incidences sur la théorie générale de la clause pénale». *R. trim. dr. civ.*, 1977, p. 268 y ss.; F. CHABAS, *La réforme de la clause pénale*. D. 1976, Chron. 229; BOCCARA, «La réforme de la clause pénale: conditions et limites de l'intervention judiciaire». *Sem. jur.*, 1975, I, 2742; EVADÉ, «La réduction des clauses pénales excessives, à propos de la loi du 9 juillet 1975», *Gaz. Pal*, 1976, 2, Doct 449; J. Y. CHEVALLIER, «Clause Pénale», *Encyclopédie Civile*, II, Paris, 25.

El C.C. alemán posibilita la moderación de la pena para el caso de que fuera excesivamente elevada (siempre que estuviera vencida y no pagada), a través de su párraf. 343. 1.º *Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch*, München, 1985. Recibiendo la norma amplio apoyo por parte de la doctrina. En este sentido. J. N. HEDEMANN, *Tratado de las obligaciones*, V. III, Madrid, 1958, p. 56; ENNECCERUS-KIPP y WOLF, *Tratado de D. Civil*, Barcelona, 1947, p. 191; K. LARENZ, *D. de Obligaciones*, V. I, Madrid, 1950, p. 371.

Por último el C.C. italiano, en su art. 1384 reconoce la reducción de la pena para el caso de que su importe sea manifiestamente excesivo, operando con los límites de equidad e intereses que hubiera podido ver satisfecho el acreedor. En este sentido, P. PERLINGIERI, *C. C. Annotato*, L. Quarto, Torino, 1983, p. 484; TRABUCCHI, *Commentario al C.C.*, Padova, 1981, p. 571; TRIMARCHI, *La clausola penale*, Milano, 1974, p. 137; MAGAZZU, «Clausola Penale», en *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1960, p. 195.

2 Cf. D. ESPIN, «La cláusula penal en las obligaciones contractuales», *R.D.P.*, Madrid, 1946, p. 162. En el mismo sentido M. ALBALADEJO, *Ibid.*, p. 266.

3 Cf. J. OSSORIO MORALES, *L. de D. Civil. Obligaciones y contratos*, Granada, 1958, p. 50.

4 Cf. Espín, *op. cit.*, p. 163.

5 Cf. DIEZ PICAZO, *Fundamentos del D. Civil Patrimonial*, Madrid, 1970, pp. 575-6; J. M. LOBATO, *La cláusula penal en el D. Español*, Pamplona, 1974, p. 177; E. RUIZ VADILLO, «Algunas consideraciones sobre la Cláusula penal», *R.D.P.*, 1975, p. 408.

El límite de la equidad es especialmente señalado en el texto del art. 1384 del C.C. italiano: Trabucchi, *op. cit.*, p. 571.

6 F. PUIG PEÑA, *Tratado de D. Civil Español*, T. IV, V. I, Madrid, 1951, pp. 122-3.

7 Cf. ALBALADEJO, *op. cit.*, p. 269.